

# Riesgos, retos y oportunidades para la contribución a la construcción de la paz en Mozambique

Iván Navarro y Josep Maria Royo

Investigadores de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Nº30 / Julio de 2025

Apunts ECP de  
Conflictes i Pau

## Resumen

Mozambique<sup>1</sup> celebra su 50 aniversario de independencia de Portugal en un momento crucial, con decisiones claves e inminentes en torno a su futuro económico y un proceso nacional de reformas en marcha. El país está saliendo de la incertidumbre política tras las elecciones de octubre de 2024, mientras que la persistente inseguridad en relación al conflicto armado en Cabo Delgado y sus consecuencias humanitarias, la fragilidad económica y las recurrentes crisis climáticas siguen poniendo a prueba la resiliencia nacional. No obstante, siguen abiertos muchos retos y desafíos pendientes relativos al proceso de diálogo nacional acordado en abril, al conflicto armado en Cabo Delgado, que se ha intensificado en los últimos meses, y al proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y RENAMO, que ha culminado en junio, entre luces y sombras.

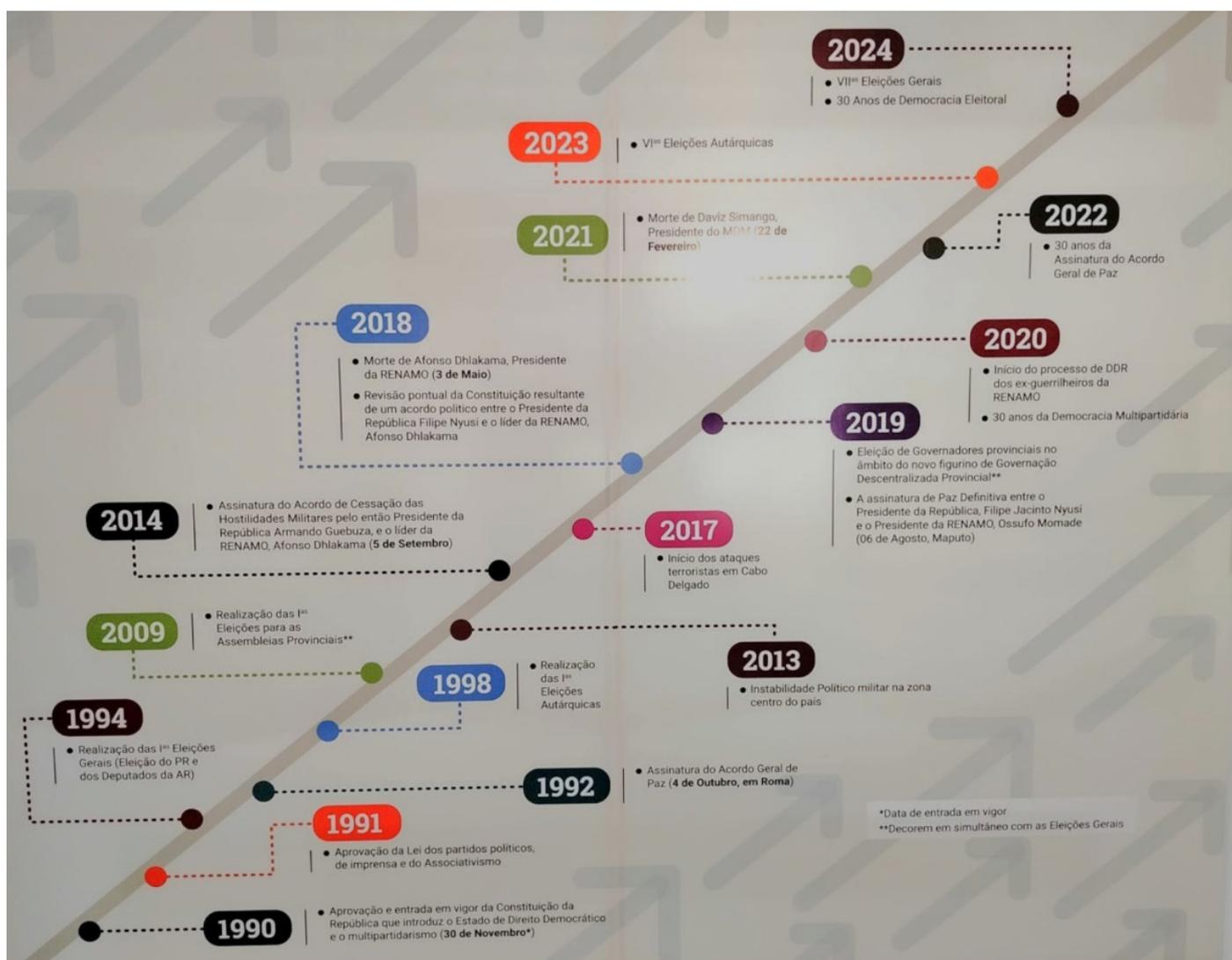
## Evolución política reciente y violencia postelectoral tras las elecciones de octubre de 2024

En el marco de la celebración del 50º aniversario de su independencia, Mozambique atraviesa una crisis política y de derechos humanos sin precedentes en su historia como nación. Las tensiones postelectorales se insertan en un contexto de centralización del poder por parte del ejecutivo. En las últimas décadas, la separación de poderes ha sido cada vez más simbólica. El presidente de

la República, que también es líder del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), controla directamente la agenda legislativa, la designación de magistrados y el funcionamiento de instituciones clave como el aparato de seguridad, la fiscalía o los medios de comunicación estatales. Esto ha generado una creciente desconexión entre el poder político y las demandas ciudadanas.

El año 2024 estuvo marcado por el aumento de las tensiones políticas en el país debido a la celebración de las elecciones generales que derivaron en una nueva victoria del partido gobernante, FRELIMO, hecho que generó una profunda crisis política y protestas ciudadanas en el país que fueron duramente reprimidas. El gobernante FRELIMO había escogido al gobernador de la provincia del centro, Inhambane, Daniel Chapo, mientras que, el que por entonces era el principal partido de la oposición, Resistencia Nacional Mozambicana (RENAMO), reeligió como candidato a Ossufo Momade. Por su parte, Venâncio Mondlane, quien fuera anteriormente candidato de RENAMO, se presentó encabezando la coalición de partidos de oposición Coalición Alianza Democrática (CAD). Posteriormente, en julio de 2024, la Comisión Nacional Electoral (CNE) prohibió el registro de la CAD para presentarse a los comicios legislativos y provinciales, también previstas para el 9 de octubre, aunque permitió que su candidato pudiera presentarse a la elección presidencial. Mondlane finalmente en agosto se sumó al emergente partido opositor Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS), creado en 2019 como una escisión de FRELIMO crítica con la gestión del partido gobernante desde 1975. PODEMOS ocupó el hueco dejado por la CAD. PODEMOS no podía ser ilegalizado, ya que la Comisión Electoral ya había aceptado sus listas de candidatos. PODEMOS

1. Este estudio es el resultado de una investigación sobre el terreno llevada a cabo en Mozambique en junio de 2025, durante la cual se realizaron numerosas entrevistas a un amplio espectro de actores locales e internacionales del ámbito político, social y humanitario. Por petición expresa de las personas entrevistadas, no se revelarán las fuentes relacionadas con los análisis que aparecen en este informe. La ECP agradece a la Delegación de la ACCD en el país la disposición y colaboración para el desarrollo de esta actividad.



Fuente: IMD

es la sucesión de la Asociación para el Desarrollo del Voluntariado en Mozambique (AJUDEM), una organización juvenil liderada por Samora Machel Junior, el hijo del primer presidente del país, Samora Machel, quien intentó presentarse a las elecciones municipales en 2018 por la alcaldía de Maputo, aunque su partido fue ilegalizado.

Las elecciones generales celebradas en Mozambique en octubre de 2024 fueron concebidas como una oportunidad clave para reforzar la institucionalidad democrática y afianzar la estabilidad del país tras varios años marcados por el conflicto armado con RENAMO y la guerra en Cabo Delgado, además de diferentes focos de tensión política y social. Sin embargo, los comicios evidenciaron una vez más las grietas profundas en el sistema político mozambiqueño: acusaciones de fraude electoral, violencia postelectoral, represión de la

oposición, y la fragilidad de las instituciones encargadas de arbitrar el proceso electoral.

FRELIMO salió oficialmente victorioso de los comicios. La Comisión Electoral publicó el 24 de octubre unos resultados que dieron una mayoría de dos tercios en el Parlamento y su candidato Daniel Chapo ganó la votación presidencial; Venâncio Mondlane y el partido PODEMOS quedaron en segundo lugar en ambos recuentos mientras que el apoyo al anterior principal partido de la oposición, RENAMO, colapsó. FRELIMO obtuvo 171 diputados, PODEMOS 43, RENAMO 28 y el MDM 8. En las elecciones de 2019, en las que PODEMOS no participó, FRELIMO había obtenido 184 diputados, mientras que RENAMO había obtenido 60 escaños, lo que pone de manifiesto su derrota frente al nuevo partido PODEMOS. No obstante, los resultados fueron inmediatamente cuestionados. RENAMO,

debilitado por divisiones internas y por el desgaste de sus liderazgos, optó por mantener su participación institucional, lo que le supuso importantes críticas por parte de la ciudadanía, así como PODEMOS, que inicialmente había realizado un llamamiento al boicot de los resultados. Las denuncias incluyeron irregularidades en el registro de votantes, manipulación de actas electorales, obstrucción al acceso de observadores independientes y uso de recursos públicos para fines partidistas. En varias zonas del centro y norte del país, la oposición reclamó victorias municipales y provinciales que fueron revocadas posteriormente por decisiones administrativas. Las elecciones estuvieron marcadas por una baja participación (43%), especialmente en el norte del país, y por acusaciones de fraude como urnas rellenas, “votantes fantasma”, y tal y como se ha señalado, el uso de recursos del Estado para favorecer a FRELIMO.

## Las movilizaciones post electorales

En los días y semanas posteriores a la publicación de los resultados, se desataron protestas ciudadanas en ciudades clave como Nampula, Beira y Quelimane, aunque posteriormente las movilizaciones se extendieron al conjunto del país, incluso en feudos tradicionales de FRELIMO, como la provincia de Gaza, en el sur. Estas manifestaciones fueron reprimidas con violencia por los cuerpos de seguridad. Se documentaron decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y al menos una veintena de muertes. La CNE y el Tribunal Constitucional, ambos ampliamente percibidos como parciales a favor de FRELIMO, rechazaron revisar los resultados. El Tribunal Constitucional el 23 de diciembre admitió irregularidades, pero dictaminó que “no influyeron sustancialmente en la transparencia del proceso”. Diversas organizaciones locales e internacionales elevaron a cerca de 400 personas muertas y más de 4.000 detenidas como consecuencia de la represión de los cuerpos de seguridad, principalmente en los meses posteriores a las elecciones, noviembre y diciembre, aunque el clima de represión se prolongó hasta marzo. La Plataforma DECIDE cifró, el 13 de junio de 2025, en 378 las víctimas mortales como consecuencia de la represión, más de 4.000 personas heridas (entre las cuales, más de 750 heridas de bala) y alrededor de 7.000 personas detenidas, entre las cuales permanecían detenidas en junio de 2025 alrededor de 3.000 personas en todo el país.

*Aunque la violencia electoral no es un fenómeno nuevo en Mozambique, el hecho de que en 2024 se haya repetido con mayor intensidad sugiere una creciente frustración popular ante la falta de alternancia y de canales democráticos eficaces para la expresión política*

La violencia electoral, sin embargo, no es un fenómeno nuevo en Mozambique. Ya en las elecciones de 2014 y 2019 se registraron episodios similares, aunque con movilizaciones más reducidas y localizadas, y una respuesta más contenida por parte de los cuerpos de seguridad.

El hecho de que en 2024 se hayan repetido con mayor intensidad sugiere una creciente frustración popular ante la falta de alternancia y de canales democráticos eficaces para la expresión política. En este sentido, aunque en un primer momento las movilizaciones se vinculaban a las irregularidades y el fraude electoral, acabaron aglutinando todo un clima de descontento y crisis previa vinculado a una situación de exclusión económica de amplios sectores de la población, sumada a la precariedad de servicios básicos, que refuerza la percepción de que el sistema está capturado por una élite que gobierna en función de intereses propios y no del bien común. A esta cuestión se suma la pobreza y la desigualdad, el alto coste de la vida y las altas tasas de desempleo; las asimetrías entre el mundo urbano y el mundo rural, las asimetrías socioeconómicas entre el norte, el centro y el sur del país, donde se ubica la capital, o las desigualdades intergeneracionales; la desigual distribución de la renta y la desigual distribución de los beneficios derivados de la presencia de industrias extractivas, entre otros factores, según diversos análisis.

Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Integridade Pública (CIP) y el Observatório do Meio Rural (OMR), entre otros, documentaron las irregularidades y propusieron una agenda de reformas institucionales: despartidarización del Estado, fortalecimiento del poder judicial, autonomía de los órganos electorales y garantías para la libertad de prensa. No obstante, hasta junio de 2025, estas propuestas no han sido atendidas por el Gobierno.

La comunidad internacional reaccionó con cautela. La Comunidad de Desarrollo del Africa Austral (SADC) y la Unión Africana (UA) emitieron comunicados genéricos llamando al diálogo y a la paz, mientras que la UE y EEUU expresaron preocupación por la violencia, pero evitaron sanciones o medidas de presión significativas. Algunos analistas interpretan esta postura como una forma de mantener la estabilidad regional frente a la amenaza de la insurgencia en Cabo Delgado. El clima de violencia, movilizaciones y represión de los cuerpos de seguridad empezó a remitir en febrero, aunque en marzo todavía se produjeron algunos choques esporádicos, como en Maputo

a principios de marzo, donde murieron dos manifestantes como consecuencia de la intervención de los cuerpos de seguridad en una movilización de partidarios de Venâncio Mondlane. En febrero, las relaciones entre Mondlane y PODEMOS se rompieron, ya que Mondlane acusó a PODEMOS de “venderse” por haber tomado escaños en la legislatura en enero a pesar de los llamados a boicot, y afirmó el 7 de febrero que crearía su propio partido.

## El Compromiso Político para un Diálogo Nacional Inclusivo

En un paso positivo, nueve partidos políticos con representación a escala local, provincial o nacional, incluido el gobernante FRELIMO y los principales partidos de la oposición PODEMOS y RENAMO, llevaron a cabo conversaciones directas para buscar una solución a la situación y firmaron el 5 de marzo un acuerdo en el que se comprometieron a un diálogo nacional inclusivo, en particular con el objetivo de revisar la Constitución. En abril, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad este compromiso con un diálogo nacional inclusivo, conocido como la Ley de Compromiso Político para un Diálogo Nacional Inclusivo –desarrollado a partir del acuerdo alcanzado en marzo con los líderes de la oposición– centrado en la reforma del Estado, la justicia y los sistemas electorales.<sup>2</sup> Al no disponer de presencia en el Parlamento por su ruptura con PODEMOS, Modlane no participó de estas conversaciones. El presidente Chapo y Modlane también se reunieron bilateralmente el 23 de marzo para rebajar la tensión.

Desde entonces se ha estado discutiendo la conformación y participación de los diversos actores en el proceso de diálogo inclusivo. Este diálogo prevé la creación de una comisión técnica formada por 21 miembros, dos por cada uno de los nueve partidos políticos, y tres miembros de la sociedad civil. Las discusiones en la actualidad se han centrado en torno a la selección de los miembros de la sociedad civil que deberán participar en la comisión técnica y las dudas en torno a la participación de Venâncio Mondlane en el proceso de diálogo, al estar excluido del proceso por no disponer de un partido político –debido a su ruptura en febrero con PODEMOS.

Las organizaciones Instituto para la Democracia Multipartidaria (IMD) y la Fundación MASC (Mecanismo de Apoyo a la Sociedad Civil) han sido designadas para

## Proceso de diálogo nacional inclusivo



Fuente: elaboración propia

dar apoyo a esta comisión técnica, con el respaldo económico de la UE y Suiza. Esta comisión técnica supervisará el trabajo de 10 subgrupos temáticos, formados por los partidos políticos y por miembros de las diferentes instituciones del Estado, que trabajarán en torno a diferentes temas, entre ellos, la reforma de la Constitución, la reforma fiscal, la reforma del sistema político y la promoción de la reconciliación, temas que corresponden a algunos de los subgrupos establecidos. Las decisiones elaboradas por los subgrupos temáticos serán revisadas por la comisión técnica y posteriormente serán presentadas en la Asamblea Nacional y al Ejecutivo del país.

En paralelo, según fuentes de la sociedad civil, el 3 de junio se inició el Foro Nacional de la Sociedad Civil. Este foro debe aportar ideas y propuestas a los subgrupos, para que sean debatidas y confluyan en propuestas de reformas concretas. Este foro consta de diferentes niveles, y estará compuesto por diferentes foros distritales que a su vez reportarán a sus respectivos foros provinciales. Se estima que este proceso tendrá una duración de dos años, periodo tras el cual la Asamblea Nacional deberá aprobar las reformas propuestas.

En este escenario, la crisis postelectoral de 2024 ha evidenciado que el proceso de democratización mozambiqueño está lejos de consolidarse. La continuidad del autoritarismo electoral, la instrumentalización del aparato estatal y la represión sistemática de la oposición generan un clima de desconfianza generalizada. Si no se introducen reformas profundas, el sistema podría continuar deslegitimándose, con el consiguiente riesgo de nuevas oleadas de violencia, mayor fragmentación social y retrocesos democráticos.

2. Ley de Compromiso Político para un Diálogo Nacional Inclusivo, 2 de abril de 2025. Publicado en el Boletim da República, 11 de abril de 2025. Disponible en <https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/assembleia-da-rep%C3%BAblica-suplemento-n%C2%BA-1-de-110425-pag-442-1-4-br-n%C2%BA-69-boletim-da-rep%C3%BAblica?utm>

## El conflicto de Cabo Delgado: origen, causas y evolución (2017 - junio 2025)

El conflicto armado en Cabo Delgado, una provincia situada al norte de Mozambique, constituye uno de los más graves y persistentes focos de inestabilidad en el sureste de África desde octubre de 2017. Su irrupción marcó el comienzo de una insurgencia yihadista de carácter irregular, que ha escalado hasta convertirse en una guerra prolongada con implicaciones regionales e internacionales. La violencia se ha centrado especialmente en distritos como Mocímboa da Praia, Palma, Macomia, Quissanga y Muidumbe, afectando gravemente a la población civil, que ha sufrido desplazamientos masivos, abusos de derechos humanos y una crisis humanitaria persistente. Recientemente, la violencia se ha extendido a otras provincias vecinas, como Niassa y Nampula.

La insurgencia se originó con un ataque coordinado de jóvenes musulmanes contra comisarías de policía en Mocímboa da Praia. Posteriormente, el grupo armado, conocido localmente como Ahlu Sunnah Wa-Jama'ah y más tarde vinculado al Estado Islámico (IS), adoptó tácticas de guerrilla, propaganda, terrorismo y redes de reclutamiento clandestinas. Desde 2019, la insurgencia pasó a formar parte de la Provincia Central Africana del Estado Islámico (ISCAP), lo que evidenció su vinculación con movimientos yihadistas transnacionales, especialmente en Tanzania, Somalia y la región de los Grandes Lagos. Sin embargo, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales.

Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22% de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Entre las causas del conflicto destacan elementos estructurales de orden histórico, político, religioso y económico. La marginalización crónica de la región por parte del Estado mozambiqueño ha dejado a Cabo Delgado con algunos de los peores indicadores socioeconómicos del país: altas tasas de analfabetismo, pobreza extrema, falta de infraestructura y servicios básicos. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad

y la pobreza de su población. Las tensiones étnicas y religiosas también han sido significativas: la población mayoritaria musulmana (principalmente de las etnias mwani y makua) ha percibido una discriminación sistemática por parte de las élites gobernantes, de etnia makonde y de filiación cristiana, que dominan el partido en el poder, FRELIMO.

La expansión del modelo extractivista ha exacerbado estas tensiones. El descubrimiento de enormes reservas de gas natural en la cuenca del Rovuma atrajo inversiones multimillonarias de empresas como TotalEnergies y ExxonMobil. Sin embargo, la promesa de desarrollo se convirtió en fuente de frustración. Las comunidades locales fueron desplazadas sin compensación adecuada, sus tierras confiscadas, y el empleo generado benefició a técnicos extranjeros o elites locales. Estas condiciones crearon un clima de frustración y ausencia real de oportunidades entre la juventud, quienes encontraron en el discurso yihadista una narrativa de empoderamiento y justicia.

Entre 2018 y 2021, la insurgencia intensificó sus ataques, llegando a controlar zonas urbanas clave como Mocímboa da Praia (2020), que estuvo bajo dominio insurgente durante más de un año. El asalto a Palma en marzo de 2021, que coincidió con la presencia de trabajadores internacionales del proyecto de gas, tuvo una gran repercusión mediática y forzó la suspensión indefinida del proyecto liderado por TotalEnergies (que ahora está tratando de reactivar). Ante la ineficacia del Ejército mozambiqueño, el gobierno solicitó apoyo internacional. En un primer momento se habían desplegado contratistas privados de seguridad de la compañía rusa Wagner Group, que tras un año abandonaron el país y fueron reemplazados por la compañía privada de Zimbabue Dyck Advisory Group (DAG), que también abandonó el país tras la incapacidad de las tropas mozambiqueñas de enfrentarse a la rebelión y repeler el ataque de Palma en 2021. Tras el asalto a Palma, el presidente Filipe Nyusi firmó un acuerdo bilateral con su homólogo ruandés, Paul Kagame, para el despliegue de tropas de Rwanda – acuerdo privado y secreto que no pasó por aprobación del Parlamento– que aseguraron los alrededores del proyecto de gas de TotalEnergies y recuperaron Mocímboa da Praia. De forma paralela al acuerdo con Rwanda, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) acordó el envío de una misión militar, la Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM). A mediados de julio de 2024 SAMIM se retiró del país, quedando en la actualidad únicamente las fuerzas ruandesas como elementos externos y tropas tanzanas en la frontera común.<sup>3</sup>

3. SAMIM estaba compuesta por 2.200 tropas de Sudafrica, Namibia, Bostwana, Angola y Lesotho. El acuerdo con Rwanda, en primera instancia, incluía un despliegue de 2.500 tropas. Por su parte, Tanzania tendría desplegadas entre 400 y 500 soldados en Mozambique, principalmente para evitar que los combatientes crucen la frontera de 860 kilómetros entre los dos países.

Para 2023, la campaña militar combinada había logrado un progreso considerable, reduciendo el número de insurgentes de unos 3.000 a tan solo 300, según diplomáticos regionales y analistas de seguridad en Mozambique. Aunque esta ofensiva militar redujo significativamente la capacidad operativa de la insurgencia, principalmente en las ciudades, éstos adaptaron sus tácticas, dispersándose hacia zonas rurales de Cabo Delgado y extendiéndose a las provincias vecinas de Niassa y Nampula. Desde 2022 hasta mediados de 2025, los ataques han sido más esporádicos pero persistentes, demostrando la capacidad del grupo para regenerarse y operar en condiciones de clandestinidad. La población desplazada supera las 900.000 personas, con graves carencias de acceso a alimentos, agua potable, salud y educación.

Entre abril y junio de 2025 se registró una intensificación de las operaciones del Estado Islámico de la Provincia de Mozambique (ISMP). Tras el repliegue de la insurgencia debido a la ofensiva conjunta lanzada por fuerzas ruandesas y mozambiqueñas en 2024, en el segundo trimestre del año se intensificaron los enfrentamientos armados en la región entre el ISMP y las fuerzas de seguridad mozambiqueñas y sus aliados ruandeses. Medios locales subrayaron que las acciones insurgentes han adoptado un patrón que busca el reagrupamiento, la expansión territorial y nuevas vías de financiación. El mes de mayo marcó un aumento sustancial de la capacidad ofensiva del ISMP, incluyendo operaciones en la provincia de Niassa, al suroeste de Cabo Delgado, lo cual representa su mayor incursión en esa zona desde 2021. En respuesta, el Gobierno mozambiqueño estableció un Centro Antiterrorista bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y publicó una nueva estrategia antiterrorista, orientada tanto a la acción militar como al abordaje de agravios socioeconómicos que alimentan el conflicto. Por otro lado, el 20 de mayo, la compañía TotalEnergies anunció que buscaría aprobación para reanudar su proyecto de gas natural licuado (GNL) en Cabo Delgado, suspendido desde el ataque insurgente de 2021 en Palma.

A pesar del despliegue militar, el conflicto no ha sido resuelto. La respuesta del Estado ha oscilado entre el enfoque securitario y algunas iniciativas de desarrollo, generalmente promovidas por actores internacionales. Sin embargo, muchas de estas respuestas no han logrado incorporar la participación comunitaria ni abordar las causas estructurales del conflicto. Las organizaciones de la sociedad civil han subrayado la necesidad de enfoques basados en derechos humanos, justicia social, diálogo interreligioso y fortalecimiento de las redes de solidaridad local. Hasta la fecha, el Gobierno se ha negado a promover cualquier tipo de iniciativa de conversaciones de paz con la insurgencia.

En síntesis, la insurgencia en Cabo Delgado es el resultado de una combinación de factores históricos, socioeconómicos, religiosos y políticos. Su persistencia demuestra que no puede ser derrotada solo mediante la fuerza militar. Es imprescindible una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo inclusivo, justicia territorial y una política de reconciliación cultural y religiosa.

### El acuerdo de paz de 2019 con RENAMO

El acuerdo de paz firmado el 6 de agosto de 2019 entre el Gobierno de Mozambique y la RENAMO representó un hito en la historia política del país. Este acuerdo, suscrito en Maputo, fue el tercer intento formal por cerrar el ciclo de violencia política iniciado tras la independencia. A diferencia de los acuerdos de Roma (1992) y del Memorando de Entendimiento de 2014, el pacto de 2019 fue concebido como un proceso integral, con el respaldo de Naciones Unidas y centrado en tres ejes: desarme, desmovilización y reintegración (DDR); descentralización política; y reconciliación nacional.

Los primeros dos años del proceso (2019-2021) mostraron avances sustanciales. Se creó un Mecanismo de Seguimiento conjunto con presencia de observadores internacionales, y se logró desmovilizar a más de 3.000 excombatientes de RENAMO, incluyendo a varios de los campamentos más simbólicos en Gorongosa. El programa de DDR, sin embargo, enfrentó dificultades logísticas, presupuestarias y de confianza mutua. Muchos exguerrilleros denunciaron falta de acceso a recursos para su reintegración social y económica. Algunos regresaron a sus aldeas sin empleo ni tierras, mientras otros se desplazaron hacia centros urbanos en situación de vulnerabilidad.

Uno de los principales desafíos al proceso fue la aparición, en 2019, de la autodenominada Junta Militar de RENAMO, una facción escindida que rechazó el liderazgo de Ossufo Momade y denunció que el acuerdo de paz había sido negociado sin consulta a las bases. Liderada por Mariano Nhongo, esta facción protagonizó ataques armados entre 2020 y 2021 en las provincias de Sofala y Manica. El conflicto dejó decenas de muertos y reactivó el temor a una reanudación del conflicto civil. El Gobierno respondió con una estrategia dual: operativos militares combinados con ofertas de amnistía. La muerte de Nhongo en octubre de 2021 debilitó significativamente a la Junta Militar, aunque algunas células continuaron activas durante 2022.

En cuanto a la descentralización, el acuerdo contemplaba la elección directa de gobernadores provinciales y mayor autonomía financiera y administrativa para las provincias. En la práctica, la implementación ha sido desigual. Aunque las elecciones provinciales de 2024 permitieron a RENAMO obtener victorias en algunas provincias clave, como Zambézia y Sofala, las posteriores disputas por la validez de los resultados y la imposición de gobernadores por vía administrativa socavaron la confianza en el proceso.

El 15 de junio de 2023 se completó formalmente el proceso con el desarme y la desmovilización del último grupo de excombatientes y se procedió al cierre de la última base militar y su cuartel general en Vunduzi, provincia de Sofala. En total, desde el inicio en 2019 del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), 5.221 excombatientes de RENAMO fueron desmovilizados -257 mujeres y 4.964 hombres- y sus 16 bases militares han sido cerradas.

El contexto postelectoral de 2024 agravó aún más la situación. RENAMO denunció persecución de sus cuadros, detenciones arbitrarias y el desmantelamiento de gobiernos locales ganados democráticamente. A mediados de 2025, los líderes del partido han advertido que sin garantías para la autonomía provincial y sin cumplimiento de los acuerdos, el proceso de paz podría fracasar. En algunas zonas rurales, ya se observan signos de reactivación de redes clientelares de excombatientes que amenazan con retomar las armas si continúa el incumplimiento, según diversos análisis.

La reconciliación nacional, tercer pilar del acuerdo, ha sido el componente más frágil. Si bien se han promovido actos simbólicos de paz y se han constituido comisiones de verdad a nivel provincial, no existe hasta el momento una política integral de justicia transicional ni de reparación a las víctimas del conflicto civil. Los esfuerzos de memoria histórica han sido impulsados principalmente por organizaciones de la sociedad civil y algunas iglesias, pero sin apoyo sistemático del Estado.

El papel de la comunidad internacional ha sido relevante en la financiación del DDR y en la observación del proceso. No obstante, actores como la ONU, la UE o la SADC han mostrado una actitud ambigua frente a los incumplimientos del Gobierno. En nombre de la estabilidad política y la llamada lucha contra el terrorismo en Cabo Delgado, han evitado presionar de manera decidida al Ejecutivo para que respete los acuerdos.

*El Acuerdo de Paz de 2019 ha sido un avance significativo al frenar el conflicto armado entre el Gobierno y RENAMO, pero su implementación está lejos de haberse completado*

En este marco, la sostenibilidad del proceso de paz dependerá de la voluntad política de FRELIMO para cumplir lo pactado, pero también de la capacidad de RENAMO para mantener la unidad interna y canalizar institucionalmente las demandas de sus bases. Si no se logra consolidar una cultura política pluralista, que reconozca la legitimidad de la oposición y garantice una verdadera participación descentralizada, el ciclo de violencia podría reanudarse.

En conclusión, el Acuerdo de Paz de 2019 ha sido un avance significativo al frenar el conflicto armado entre el Gobierno y RENAMO. Sin embargo, su implementación está lejos de haberse completado. Las promesas de descentralización, reintegración y reconciliación necesitan ser materializadas con urgencia para evitar una recaída en el conflicto. La paz, como insisten numerosos actores sociales, no debe entenderse como mera ausencia de guerra, sino como construcción activa de justicia, dignidad y derechos para todos los ciudadanos mozambiqueños.

## Retos, desafíos y oportunidades para la construcción de la paz

En el ámbito político, esta etapa deberá afrontar diversos retos:

- Promoción de la memoria, la justicia, la reparación y la reconciliación nacional. Impulso a espacios de reconciliación a nivel local que puedan contribuir a un clima de reconciliación nacional. En último término, los cuerpos de seguridad y la propia jefatura del Estado podrían activar algún mecanismo de reconocimiento y reparación del daño causado, en aras de promover un clima de reconciliación nacional que acompañe el proceso de diálogo.
- La participación efectiva de la ciudadanía y de la sociedad civil. El reto de este proceso, que es nuevo para todos los actores que participan en él, es que la sociedad civil y la ciudadanía se sientan partícipes de él, es decir, que la ciudadanía tenga el convencimiento de que su participación contribuirá decisivamente al resultado de este proceso de diálogo y que, en definitiva, de su resultado se deriven cambios sustanciales que puedan influir en el conjunto de la población. En este sentido, algunos de los principales escollos serán la posible desafección y la frustración por la lentitud del proceso. Falta claridad en la definición del Foro

Nacional de la Sociedad Civil, de los Foros provinciales y distritales en torno a cómo las propuestas que se discutan acaben llegando a los subgrupos temáticos. A su vez, tampoco se han definido ni publicitado los mecanismos de participación de la ciudadanía en estos foros.

- La participación de Venâncio Mondlane. Hasta el momento se desconoce cómo y si participará el principal líder opositor, lo que le conferiría una gran legitimidad al proceso. Mondlane ha intentado llevar a cabo la creación de un nuevo partido, llamado Anamalala (en lengua makua, “se va a acabar / acabó” acrónimo de la Alianza Nacional para un Mozambique Libre y Autónomo), que por el momento ha sido declarado anticonstitucional por utilizar una lengua no nacional, en lugar del portugués. El Ministerio de Justicia estableció un periodo de 30 días, ampliable a un máximo de 60, para que los promotores de este partido modificaran su nombre en aras del cumplimiento de la Constitución.
- La construcción de la paz y la transformación no violenta del espacio político. Históricamente, los cambios en Mozambique desde su independencia en 1975 se han producido a través del uso de la violencia. La movilización social siempre ha sido violenta de cara a la consecución de sus objetivos, por lo que el principal reto en la actualidad es conseguir canalizar todo el clima de frustración y reparar el contrato social entre el Gobierno y la sociedad civil a través del diálogo, y no a través de las armas.

En lo concerniente al conflicto armado en Cabo Delgado,

- Asistencia humanitaria. Mozambique se enfrenta a una triple crisis: conflicto armado, fenómenos climáticos extremos recurrentes (ciclones –norte– y sequías –sur–) y tensiones políticas tras las elecciones. La situación humanitaria atraviesa un momento crítico con 5,2 millones de personas en situación de necesidad de ayuda humanitaria en el país. Las organizaciones presentes en el país enfrentan severas restricciones presupuestarias, incrementadas debido a la cancelación de los fondos provenientes de USAiD. En la actualidad 1,3 millones de personas se encuentran desplazadas en el país principalmente por el conflicto armado, pero también debido a los ciclones y la sequía.<sup>4</sup> Además el

país acoge a 25.000 personas refugiadas provenientes de RDC, Rwanda y Burundi. Según ACNUR, en lo que va de 2025, sólo se ha conseguido el 32% de los 42,7 millones de dólares necesarios para proveer asistencia a las personas desplazadas.<sup>5</sup>

- Cooperación regional en la lucha contra ISMP. A lo largo de tres años, las fuerzas de la SADC ayudaron al ejército de Mozambique a recuperar territorio que antes estaba en manos de militantes y a estabilizar Cabo Delgado. Sin embargo, la campaña militar no logró erradicar a la insurgencia. A principios de 2025 la violencia en la región se ha vuelto a intensificar, registrándose, entre febrero y marzo una media de 8-10 ataques por semana, que empiezan a afectar a otras provincias como Nampula y Niassa. Tras la retirada de las fuerzas de la SADC, únicamente las tropas ruandesas tienen presencia en la región (defendiendo principalmente instalaciones de gas con unas 5.000 tropas desplegadas) y el Ejército tanzano controlando la frontera común. Se estima que ISMP cuenta actualmente con entre 200-400 combatientes.
- Apertura de espacios de diálogo que puedan conducir a acuerdos de paz a nivel local/distrital con la insurgencia. Hasta la fecha, la percepción de múltiples actores en el país, es que el Estado se ha negado a abrir vías de diálogo con la insurgencia debido a diferentes factores: a) no existe un interés real en terminar el conflicto armado debido a intereses económicos en la región; b) no se conoce una agenda de demandas políticas por parte de la insurgencia; c) ausencia de voluntad política debido a que no existe un entendimiento interno dentro de FRELIMO. Frente a este escenario, las iniciativas de paz, puestas en marcha por actores no estatales, se han centrado en promover diálogos intercomunitarios (macondo, makua, mwani) e interreligiosos (musulmanes, católicos, protestantes).

En lo concerniente a la implementación del acuerdo de paz de 2019,

- Criterios de selección de personas desmovilizadas no quedaron claros, especialmente en lo relativo a las mujeres excombatientes. Solo se incluyeron en el programa a 157 en el programa de DDR, principalmente a esposas de excombatientes.

4. Estas cifras de desplazamiento interno incluyen tanto a las personas consideradas IDPs (600k) como a las consideradas retornadas (600k). Esto se debe a que si eres una persona desplazada interna dentro de tu propio distrito, el sistema de OIM lo registra como una persona retornada, aunque la mayoría de estas personas no pueden realmente volver a sus casas.

5. ACNUR España, “ACNUR: Nuevos desplazamientos y la escasez de fondos agravan la crisis en Mozambique”, Nota de prensa, 25 de mayo de 2025. Disponible en <https://www.acnur.org/es-es/noticias/notas-de-prensa/acnur-nuevos-desplazamientos-y-escasez-de-fondos-exacerban-la-crisis-en-mozambique>

- Promoción de la memoria y la reconciliación nacional. Las víctimas del conflicto armado quedaron totalmente ignoradas en el acuerdo de paz de 2019. Lo mismo sucedió con los *curandeiros*, quienes reivindican una compensación.
- Aplicación de la cláusula relativa al sistema de pensiones de excombatientes. Se requerirá garantizar fondos suficientes para esta dimensión y que no se convierta en un elemento para una nueva movilización.
- La Junta Militar, una escisión de la RENAMO que se opuso a la firma del acuerdo de paz de 2019, tras la muerte de su líder, Mariano Ngongo, se encuentra totalmente desmovilizada.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

 **escola de cultura de pau**

**UAB**  
Universitat Autònoma de Barcelona

**Escola de Cultura de Pau**  
Edifici B13, Carrer de Vila Puig,  
Universitat Autònoma de Barcelona 08193  
Bellaterra (Espanya)  
Tel: +34 93 581 14 14  
pr.conflictes.escolapau@uab.cat  
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:



@escolapau  EscolaPau  escoladeculturadepau 